

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 25
O R D I N A R I A
MARTES 1º DE MARZO DE 2011

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con diez minutos del martes primero de marzo de dos mil once, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

El señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Proyectos de actas de las sesiones previa de la pública y pública número veinticuatro, ordinaria, celebradas el lunes veintiocho de febrero de dos mil once.

Por unanimidad de once votos el Tribunal Pleno aprobó dichos proyectos.

El señor Ministro Presidente Silva Meza precisó que en la sesión anterior se analizaron diversos incidentes de

inejecución relacionados con la devolución de recursos a cargo del Gobierno del Distrito Federal, por lo que solicitó al secretario general de acuerdos que diera cuenta con el primero de los asuntos listados para esta sesión, toda vez que parecería que éste incluye todos los temas que rigen las decisiones de los siguientes.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el martes primero de marzo de dos mil once:

II. 1. 542/2008

Incidente de inejecución 542/2008 de la sentencia dictada el 23 de noviembre de 2006 por el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en el juicio de amparo 953/2006-II promovido por *****. En el proyecto formulado por el señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia se propuso: “PRIMERO. Requiérase al Director General de Política Presupuestal en su carácter de autoridad directamente vinculada al cumplimiento del respectivo fallo protector, así como al Subsecretario de Egresos y al Secretario de Finanzas, todos del Gobierno del Distrito Federal, estos últimos en su carácter de superiores jerárquicos de aquél, para los efectos señalados en el último considerando de esta ejecutoria; SEGUNDO. Requiérase al Director General de Servicios al Contribuyente y al

Administrador Tributario en Parque Lira en su carácter de autoridades directamente vinculadas al cumplimiento del respectivo fallo protector, así como al Subtesorero y al Tesorero todos del Gobierno del Distrito Federal en su carácter de superiores jerárquicos de aquéllos, para los efectos señalados en el último considerando de esta ejecutoria; TERCERO. Queda sin efectos el dictamen de veinte de mayo de dos mil nueve del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el incidente de inejecución de sentencia 37/2009 de su índice; y, CUARTO. Para los efectos precisados en el considerando último de esta resolución, déjese abierto el presente incidente de inejecución de sentencia”.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a consideración del Tribunal Pleno los considerandos primero y segundo, relativos a la “competencia” y a los “antecedentes del asunto”, los que se aprobaron, en votación económica por unanimidad de votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a consideración del Tribunal Pleno el considerando tercero, precisando que éste se divide en dos temas: el primero consiste en sostener que en el proyecto se acredita la

insuficiencia de recursos presupuestales en la partida respectiva para dar cumplimiento al fallo protector, respecto de lo cual la señora Ministra Luna Ramos precisó que hizo llegar una observación al secretario general de acuerdos.

Sometida a votación la primera parte del considerando tercero, en votación económica se aprobó por unanimidad de votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a consideración del Tribunal Pleno la segunda parte del considerando tercero, respecto de la que se sostiene que este Alto Tribunal sí puede válidamente determinar cuál es la autoridad a la que asiste la atribución para realizar las transferencias que permiten a las autoridades inicialmente vinculadas tener la suficiencia presupuestal y cumplir con la sentencia de amparo.

Sometida a votación la segunda parte del considerando tercero, en votación económica se aprobó por unanimidad de votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández,

Sesión Pública Núm. 25

Martes 1º de marzo de 2011

Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a consideración del Tribunal Pleno el considerando cuarto, precisando que se dividiría en cuatro temas. El primero, en cuanto sostiene que el Administrador Tributario respectivo, el Director de Servicios al Contribuyente, el Subtesorero y el Tesorero del Distrito Federal carecen de atribuciones para realizar adecuaciones presupuestales.

El señor Ministro Aguilar Morales se manifestó de acuerdo con la propuesta; sin embargo, precisó que desde el inicio del considerando cuarto, se hace referencia a la figura de la imposibilidad del cumplimiento de la sentencia, estimando que en el caso concreto no es aplicable, pues se está ante el supuesto del incumplimiento excusable de la sentencia por las mismas razones que se presentan en el considerando respectivo; estimando que la figura de la imposibilidad del cumplimiento de la sentencia consiste en una declaratoria absoluta que establece otras consecuencias como son la declaración del incumplimiento en general y sustituto, considerando que el proyecto en esta parte debía referirse a que respecto de estas autoridades puede haber un incumplimiento excusable por las razones que se explican.

El señor Ministro Aguirre Anguiano consideró que dicha excusabilidad es temporal, por lo que el señor Ministro Presidente Silva Meza solicitó al secretario general de acuerdos que se hicieran los ajustes necesarios al proyecto.

Sometida a votación la primera parte del considerando cuarto modificado, en votación económica se aprobó por unanimidad de votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a consideración del Tribunal Pleno el segundo tema del referido considerando cuarto relativo a las facultades del Director General de Política Presupuestal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal para cumplir con el fallo protector, conforme al marco jurídico aplicable, el cual se aprobó, en votación económica, por unanimidad de votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a consideración del Tribunal Pleno el tercer tema del

considerando cuarto relativo a la interpretación del artículo 73 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, en el que se propone una interpretación conforme que permite concluir que el Jefe de Gobierno puede solicitar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la ampliación de la partida para el cumplimiento de sentencia, una vez que los recursos que puedan transferirse a dicha partida, provenientes de las diversas que integran el presupuesto de egresos del Distrito Federal, se hayan agotado al no ser disponibles; es decir, cuando la totalidad de los destinados originalmente a éstas, constituyan gastos etiquetados o bien, se trate de gasto comprometido.

El señor Ministro Franco González Salas se manifestó, en principio, de acuerdo con la propuesta; sin embargo, consideró que la interpretación debía ir más allá de lo que se propone.

Estimó que como Tribunal Constitucional, éste debía tomar en cuenta las garantías fundamentales que establece la Constitución, en especial, respecto del párrafo sexto del artículo 17, que establece como una garantía del justiciable que “Las leyes tanto federales como locales, garanticen la plena ejecución de las sentencias”; así como lo previsto en materia de amparo, respecto de las fracciones XVI y XVII del artículo 107 de la Constitución.

Precisó que el sentido del proyecto es correcto; sin embargo, estimó que la interpretación conforme debe concluir que el primer párrafo no establece a la Asamblea una facultad potestativa, sino que en cumplimiento de las garantías constitucionales, los órganos legislativos tienen obligación de establecer las partidas necesarias para dar cumplimiento a las decisiones definitivas de cualquier órgano jurisdiccional en especial, respecto de una determinación definitiva por los órganos del Poder Judicial de la Federación en materia de ejecución en los juicios de amparo. Asimismo, consideró que esta interpretación debía ser clara en el sentido de que independientemente de que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal tomen las medidas necesarias para buscar otros recursos, no las exime de buscar, a través de movimientos presupuestales entre los recursos con que cuentan y que son disponibles para hacer transferencias los fondos necesarios para cumplir con las resoluciones, indicando que se circunscribía a las sentencias de amparo; precisando que su posición sería en el sentido de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe fijar una interpretación clara respecto del precepto involucrado.

El señor Ministro Pardo Rebolledo consideró innecesaria la interpretación conforme que se propone respecto del artículo 73 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, toda vez que en el proyecto se llega a la conclusión de que una vez analizada la normativa

aplicable, que incluso como un paso previo a la solicitud hecha a la Asamblea Legislativa, dé una ampliación de alguna partida, es factible que las propias autoridades a las que se vinculan en el proyecto, puedan lograr el cumplimiento de todas las sentencias.

Recordó que el citado precepto se refiere al caso en que las partidas presupuestales sean insuficientes, previendo que el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría de Finanzas podrá solicitar a la Asamblea una ampliación a la partida correspondiente; sin embargo, estimó que se está en una etapa previa llegando a la conclusión de requerir a las autoridades competentes, para que realicen en el presupuesto que ya tienen asignado, transferencias entre partidas no etiquetadas, para dar cumplimiento a las sentencias, considerando que no sería necesaria dicha interpretación conforme pues sólo debe hacerse referencia al citado numeral respecto a que no constituye un obstáculo para que la autoridad o las autoridades requeridas, lleven a cabo estas transferencias entre las partidas autorizadas para cumplir con las sentencias de amparo y, en esta medida, sólo sería necesario precisar respecto de este enfoque del citado artículo 73, por lo que se manifestó de acuerdo con la mención al referido precepto, pero no con la interpretación conforme, sino únicamente para establecer que independientemente de su contenido, las autoridades vinculadas, pueden cumplir con las sentencias de amparo a través de transferencias entre sus partidas.

El señor Ministro Cossío Díaz coincidió con la propuesta del señor Ministro Franco González Salas precisando que se listaron más de trescientos cincuenta asuntos para la sesión; recordando que en la sesión anterior se resolvió una cantidad importante, por lo que consideró que no se están enfrentando únicamente a un amparo y su cumplimiento, pues éste servirá como base para fijar criterios y parámetros con los que las autoridades responsables deben proceder para darle un cabal cumplimiento a las sentencias.

Señaló que si se estuviera ante un caso aislado, no tendría inconveniente en aprobar la postura que se propone; sin embargo, en este momento se debe visualizar el problema en su integridad para establecer la forma en que las autoridades deban generar los pasos para efecto del cumplimiento de las sentencias, agregando que se trata de un asunto de la mayor importancia y que estaría a favor del proyecto en este punto con las adiciones indicadas por el señor Ministro Franco González Salas.

El señor Ministro Aguilar Morales manifestó la importancia de lo señalado por el señor Ministro Cossío Díaz en el sentido de que la interpretación de este precepto, como podría ser la de algún otro precepto de otra entidad federativa, es una disposición que regula internamente el manejo presupuestal del Gobierno del Distrito Federal; sin

que deba vincular este precepto la decisión del Tribunal Pleno pues se debe cumplir con las sentencias de amparo porque su cumplimiento deriva de una exigencia constitucional.

En ese tenor, consideró que independientemente de lo que pueda regular el referido artículo 73, este Alto Tribunal, con base en las disposiciones constitucionales que exigen el cumplimiento de las sentencias de amparo, aun en contra de disposición en contrario, tiene la facultad de ordenar lo que sea necesario para que se cumpla la sentencia, no sólo desde el punto de vista constitucional sino, incluso, el propio artículo 111 de la Ley de Amparo establece que se tomen las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencias de amparo.

Por tal razón, precisó que los requerimientos posteriores al incumplimiento de la sentencia de amparo prevén que se lleven a cabo las adecuaciones presupuestales necesarias conforme a los procedimientos previstos para tal fin, siempre que sea de manera inmediata, para demostrar a este Alto Tribunal que estas adecuaciones fueron o no posibles, así como que debe permanecer la orden expresa a la autoridad responsable o a las que estén obligadas al cumplimiento para tomar las medidas pertinentes, independientemente de lo previsto en el artículo 73 mencionado.

El señor Ministro Valls Hernández coincidió con el argumento de los señores Ministros Pardo Rebolledo y Aguilar Morales en el sentido de que no corresponde a este Alto Tribunal elaborar una interpretación conforme del artículo 73, pues a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación le corresponde procurar que se cumpla con las sentencias de amparo en términos de lo que establece la Constitución.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea consideró que se debía analizar el asunto en dos vertientes: primero, como la solución concreta de este caso en particular; y, segundo, como un caso paradigmático para establecer como precedente el curso que debe seguir el cumplimiento de las sentencias de amparo y así, dar un paso importante en la solución de estos problemas.

Además, consideró que en el asunto se analizan dos cuestiones: el cumplimiento de las sentencias de amparo que es inexcusable, pues aun cuando haya imposibilidad para ello, se debe dar un cumplimiento sustituto y la responsabilidad de las autoridades vinculadas al cumplimiento.

Consideró que se podría construir una interpretación que combine las dos posturas asumidas en la sesión, es decir: que las autoridades responsables señalan que con base en lo previsto en el referido artículo 73 tienen un

impedimento legal para dar cumplimiento a la sentencia de amparo; respecto de lo que valdría abundar en el propio proyecto con los argumentos precisados por el señor Ministro Franco González Salas derivados de los artículos 17 y 107 constitucionales, en el sentido de que para el cumplimiento de la sentencia ningún precepto legal puede ser obstáculo para que las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, puedan llevar a cabo transferencias de partidas para cumplir con una sentencia de amparo, e insistió en construir una teoría que podría mejorarse a partir de los citados preceptos constitucionales, incluyendo la referencia al citado 73, estimando correcto establecer un segundo argumento, con independencia de esta interpretación, de que ninguna disposición pueda ser obstáculo para el cumplimiento de las sentencias, con lo que se complementarían las dos posturas presentadas para integrar un precedente.

La señora Ministra Luna Ramos manifestó que se trata de una situación preocupante, especialmente por el número de asuntos que se tienen en lista por estar pendiente su cumplimiento derivado de algún impuesto declarado inconstitucional, lo que motivó muchos de estos, por lo que consideró que si no se puede establecer el cumplimiento de las sentencias de amparo, no se restablece el orden jurídico y, por tanto, implica una afectación grave al estado de derecho.

Agregó que en la sesión anterior se inició el análisis de los incidentes de inejecución listados y se acordó devolver al Tribunal de origen aproximadamente cincuenta, respecto de los que el Gobierno del Distrito Federal pretende dar cumplimiento a través del pago correspondiente, a reserva de que se verifiquen.

Manifestó que existe una intención por parte del Gobierno del Distrito Federal de cumplir con las referidas sentencias de amparo, como deriva de su petición en el presupuesto de egresos de \$334,000.00 para dar cumplimiento a las resoluciones definitivas; sin embargo, en el presupuesto de este ejercicio fiscal, la Asamblea de Representantes otorgó \$60,000.00 que de acuerdo a lo señalado por el Tesorero del Gobierno del Distrito Federal, se agotaron con el cumplimiento que se pretende dar a los incidentes de inejecución analizados en la sesión anterior que se devolvieron a los Tribunales de origen para su verificación.

Por ende, manifestó que dicha cantidad no alcanzaría para cubrir el pago de los demás asuntos listados, por lo que el referido Tesorero argumenta que se trata de un incumplimiento excusable, porque no se cuenta con cantidad alguna de la partida asignada para tal fin. Por ende, consideró que se debe contestar dicho argumento con la interpretación del artículo 73 mencionado, que establece que al no contar con los recursos, se debe solicitar una

ampliación presupuestal a la Asamblea de Representantes, la cual deberá tomar en cuenta que no se afecten las subfunciones del presupuesto de egresos y que lo permitan las condiciones económicas de la Hacienda Pública.

Agregó que en el proyecto se propone una interpretación del referido precepto en el sentido de determinar que el artículo no solamente se refiere a una solicitud de ampliación del presupuesto, sino también a una adecuación de las partidas presupuestales que ya fueron otorgadas al Gobierno del Distrito Federal, ya que estas autoridades, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 constitucional y en su Ley de Presupuesto, no pueden hacer ejercicio de ninguna partida que no esté debidamente presupuestada, pues de lo contrario, podrían incurrir en responsabilidad, razón por la cual el proyecto lleva a cabo una interpretación del referido precepto para que se entienda en el sentido de la adecuación presupuestal.

Estimó que ambas interpretaciones podrían ser válidas, ya que se puede sostener que se terminó el presupuesto, respecto de lo que no solamente el citado artículo 73 se refiere a una solicitud de ampliación para pagar, sino que también estimó que podría también entenderse en el sentido de que es factible realizar adecuaciones para que se puedan cubrir las cantidades faltantes.

Indicó que los señores Ministros Pardo Rebolledo, Aguilar Morales y Valls Hernández no aprueban esa interpretación al estimar que el artículo 73 se refiere a la solicitud de ampliación ante la Asamblea de Representantes cuando no existe posibilidad alguna dentro de las partidas presupuestales, considerando que no es necesario interpretar dicho numeral, porque la obligación del cumplimiento de las sentencias de amparo es una obligación constitucional, por lo que las autoridades están obligadas a hacer lo necesario para lograr su cumplimiento.

Al respecto, indicó que en el proyecto se pretende que si alguna autoridad no realiza determinada adecuación presupuestal se le indique que puede realizarla, toda vez que así se prevé en el oficio remitido por el Tesorero del Distrito Federal.

Por ende, consideró que podría evitarse la interpretación propuesta del referido artículo 73, porque la propia Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal en su Capítulo III, denominado “De las adecuaciones presupuestarias”, prevé que la autoridad del Gobierno del Distrito Federal puede acudir a esta figura si determina que se agotó la partida presupuestal que fue otorgada para el cumplimiento de las sentencias, para lo que se especifica el procedimiento que debe seguirse.

Asimismo, consideró conveniente hacer una solicitud de ampliación presupuestal en términos del artículo 73 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; sin perjuicio de que conforme al Capítulo Tercero de la mencionada ley puedan solicitar una adecuación presupuestal para dar cumplimiento a las sentencias judiciales.

Manifestó que en el proyecto se hizo una precisa delimitación de dichas facultades, recordando que las Administraciones Fiscales Regionales, el Tesorero del Gobierno del Distrito Federal y el Subtesorero, carecen de facultades para realizar dichas adecuaciones presupuestales porque la ley no les faculta para ello; sin embargo, precisó que en el proyecto se establecen las autoridades que, de acuerdo con el Reglamento Interior, la Ley de Presupuesto y la Ley Orgánica del Gobierno del Distrito Federal, cuentan con facultades para llevar a cabo este tipo de procedimientos, por lo que uniéndose a la postura de los señores Ministros Aguilar Morales, Valls Hernández y Pardo Rebolledo concluyó que no sería necesaria la referida interpretación del artículo 73 porque existe la posibilidad de que las autoridades lleven a cabo dichas adecuaciones sin interpretarlo, recordando que lo importante para efecto del cumplimiento de estas sentencias es el pronunciamiento de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que, tratándose de cumplimiento de sentencias de amparo, se refiere a una obligación constitucional respecto de la que

aun cuando existan preceptos que eviten la posibilidad de que esas autoridades paguen lo que no está presupuestado, se trata de una obligación constitucional en la que pueden adecuarse las partidas no etiquetadas ni comprometidas para el pago de lo determinado en estas sentencias de amparo, por lo que manifestó que estaría con el sentido del proyecto pero se apartaría de sus consideraciones.

El señor Ministro Aguirre Anguiano recordó y dio lectura al artículo 17 constitucional, surgiéndole la interrogante respecto a si las leyes del Distrito Federal propugnan por la plena ejecución de sus resoluciones, señalando que partiendo de la buena fe se debe creer que sí, pero que en el caso pretenden burlar su obligación cumpliendo de formas inciertas, pues de los oficios remitidos se advierte que tienen el fin de postergar el cumplimiento de sus obligaciones, estimando que dichas autoridades seguramente tienen la intención de cumplir, pero de conformidad con lo previsto en el artículo 17 constitucional, en relación con el diverso 103 constitucional, que señala: “No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional o apareciere que ya no hay materia para la ejecución...”, se desprende que debe quedar claro que la decisión de la Corte no se va a supeditar ni a suspender dependiendo de lo que sostenga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues ella no puede

condicionar el cumplimiento de obligaciones de carácter constitucional.

Agregó que estas obligaciones son de preferente cumplimiento, por lo que se manifestó en desacuerdo con estas disposiciones de carácter formal para suspender el cumplimiento.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas se manifestó en el mismo sentido de los señores Ministros que le precedieron, indicando que el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea la había dejado sin materia, pues no consideró necesario o indispensable que se interprete el citado artículo, sino muy conveniente hacerlo, por el precedente que se pueda generar y también debe considerarse como un aval o de respaldo al actuar de las autoridades para hacer estas adecuaciones del presupuesto.

Por otra parte, precisó que en la página cincuenta y ocho del proyecto se establece la interpretación del referido precepto al señalar: “sostener que lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal impide acudir a los mecanismos de adecuaciones presupuestarias y que prevé, como única opción, una vez agotados los recursos destinados originalmente a la partida respectiva, solicitar una ampliación a la Asamblea Legislativa, implicaría atribuirle a este Órgano Legislativo, la intención de establecer una regulación contraria a lo previsto

en el párrafo sexto del artículo 17 constitucional, pues tal limitación constituiría un grave obstáculo al cumplimiento de las sentencias, ya que el marco jurídico aplicable implicaría un sistema, al tenor del cual resultaría más complejo el pago de gastos exigidos constitucionalmente, que otros derivados de los vínculos jurídicos que voluntariamente celebre el Distrito Federal”, por lo que con independencia de que se haga la petición a la Asamblea Legislativa, estas adecuaciones o transferencias de partidas de presupuesto que pueden ser transferidas para el cumplimiento de las sentencias resulta indispensable que se les dé esta interpretación y este contenido al artículo 73 de la citada ley.

El señor Ministro Aguilar Morales recordó que a este Tribunal y a todos los juzgadores de amparo debe quedarles clara la importancia del cumplimiento de las sentencias de amparo, por la majestad que tienen; que se traduce en la importancia de su cumplimiento, pues tienen que ser cuestiones que se reflejen en la realidad de los justiciables, a los cuales no les sirve de nada que se establezcan las posibilidades de un cumplimiento si en la realidad los que han sido protegidos por la justicia federal, no ven la eficiencia de estos pronunciamientos, a través del cumplimiento de las sentencias de amparo que deriva de la propia norma constitucional, por lo que el Tribunal Constitucional, al conocer del cumplimiento de sentencias, no puede estar sujeto ni limitado a ninguna otra disposición.

Recordó que el artículo 73 citado en el proyecto es el argumento toral de la autoridad, para demostrar que es excusable el incumplimiento, por lo que las consideraciones para contestar dicho argumento sirven, a su vez, para condicionar la forma en que se ordene el cumplimiento de las sentencias de amparo, sin que tenga importancia lo que disponga el artículo 73 en comento, pues con éste o sin él se han de cumplir las sentencias de amparo, sin restricciones en la forma alguna.

Estimó que tomar como pretexto el citado artículo 73 por parte del Tesorero únicamente sirvió para demostrar que las autoridades encontraron esta norma legal o secundaria para aducir como excusable el cumplimiento, sin que se pueda actualizar ninguna excusa establecida en las leyes secundarias, pues la propia Constitución es la que permite a los Tribunales dictar todas las órdenes necesarias para que se cumplan las sentencias de amparo y, por tanto, se manifestó en contra de que se haga una relación como sujetando al Tribunal Constitucional en la forma en que debe solicitar el cumplimiento de la sentencia de amparo.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea indicó que en relación con lo mencionado por el señor Ministro Aguilar Morales, es importante el precedente que se establezca porque existe la disyuntiva del servidor público que tiene un marco competencial y no tiene atribuciones para hacer transferencias de partidas, por lo que surge la interrogante

relativa a la interpretación del referido artículo 73 que, por una lado, tiene que cumplir con que se haga una partida y, por otro, tiene un ámbito competencial por lo que para evitar esta disyuntiva y para que quede claro que no es obstáculo ningún otro ordenamiento legal o reglamentario, es importante el precedente que se emita.

Por ende, estimó que si la autoridad está aduciendo no poder dar cumplimiento por lo dispuesto en este artículo se tiene que hacer referencia al citado precepto no como una excusa para no cumplir y otra a mayor abundamiento de que esta disposición no es obstáculo para dejar de cumplir, por lo que debe de realizarse un pronunciamiento claro y categórico del Tribunal Pleno como precedente y una vez que se emita, se termine con esta disyuntiva pues en este momento al no haber un mandato claro de la Suprema Corte, las autoridades están en una posición muy complicada para cumplir con la sentencias de amparo, pues carecen de facultades para hacer esta transferencia de recursos, por lo que la Suprema Corte se lo tiene que ordenar y debe establecer las reglas que sirvan de precedente.

El señor Ministro Cossío Díaz precisó que no está de acuerdo con atribuirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el calificativo de que su majestad es grande, pues estima que oculta un problema relativo a la realidad nacional ya que es difícil cumplir con las sentencias de amparo, por lo

que consideró que la frase “majestad” parecería que automáticamente logra su realización, por lo que estimó que se utilizara un lenguaje más humilde ante la gravedad del problema.

Consideró que, como precisó el señor Ministro Franco González Salas, parecería que se está proponiendo una salida para el momento en que el Secretario de Finanzas señale que no puede hacer transferencias presupuestales y que los quejosos nuevamente acudan ante este Alto Tribunal, con lo que se acumularía un gran número de asuntos, por lo que consideró que la salida la propone el señor Ministro Aguilar Morales.

Estimó que la interpretación conforme debía hacerse en el sentido de que no se aceptará la respuesta de que no son posibles esas transferencias presupuestales sino que la referida Secretaría debía elaborar las solicitudes necesarias para tal fin.

Precisó que el tema central consiste en si existen o no recursos, pues cada vez que se solicitan se da a las autoridades una respuesta distinta, por lo que precisó la importancia de hacer la referida interpretación conforme.

Recordó que el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea manifestó que las autoridades deben acatar las sentencias de amparo; sin embargo, se encuentran ante el dilema de

hacerlo desobedeciendo ciertas disposiciones internas con lo que podrían incurrir en algún tipo de responsabilidad.

Señaló que coincide con la interpretación del señor Ministro Aguilar Morales y que debía resolverse ese tema pues no se trata de pensar que se está “comprando” el argumento de la autoridad respecto del referido artículo 73, pues cuando la autoridad argumente que no cuenta con recursos suficientes para dar cumplimiento a las sentencias de amparo se le indicará que elabore las solicitudes necesarias ante la Asamblea Legislativa, por lo que estimó que debían darse soluciones a los gobernados.

Señaló que en este punto difiere de la posición del señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, pues consideró de fondo el requerir a las autoridades para que cumplan con las sentencias de amparo, estimando que la única manera de lograrlo consiste en solicitar una ampliación presupuestaria a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o, en un caso extremo, solicitar un endeudamiento ante el Congreso de la Unión.

El señor Ministro Aguirre Anguiano compartió la idea del señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea respecto a que se ha suscitado un falso debate, en tanto que la interpretación al referido artículo 73 la ha construido el señor Ministro Aguilar Morales.

Indicó que no compartía la interpretación del señor Ministro Cossío Díaz al estimar que no hay contradicciones sino adecuaciones y puntos de vista diferentes, recordando que lo importante del asunto radica en que se sigue un procedimiento que podría llegar incluso hasta el Congreso de la Unión para que autorice endeudamientos y se lleven a cabo las transferencias, lo que constituiría un argumento respecto de la interpretación del referido numeral al cual no se opone, recordando que el presupuesto del Distrito Federal, es de \$137,012,501,104.00, lo que significa que se trata de una ciudad de casi nueve millones de habitantes, señalando que el porcentaje de este presupuesto que se requiere para recobrar el orden constitucional violado por las autoridades, es de menos del 1%, por lo que consideró que existen recursos para dar cumplimiento a las sentencias de amparo, agregando que lo “majestativo” resulta de su necesaria respetabilidad y no de la falta de respeto en que alguien pudiera incurrir respecto a ella.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia consideró que el argumento de interpretación conforme en relación con el artículo 73 que invoca la autoridad responsable, es fundamental para el éxito de los incidentes de inejecución, recordando que ha sostenido que para cumplir con las sentencias de amparo el pago deberá solicitarse al Congreso respectivo en la partida correspondiente, tal como ha sucedido desde hace años respecto de los pagos que deben hacer las autoridades.

Consideró necesario interpretar el artículo 73 para precisar que antes de hacer la solicitud al Poder Legislativo respectivo, las autoridades deberán hacer las adecuaciones correspondientes, toda vez que en los últimos años se ha entorpecido la ejecución de las sentencias, por lo que con dicha interpretación se evitaría tal situación, manifestando que incluso, dentro del Poder Judicial de la Federación, se han llevado a cabo adecuaciones presupuestarias para cubrir determinadas situaciones, por lo que se manifestó a favor del proyecto.

El señor Ministro Aguilar Morales consideró que en pocos asuntos como el que se trata se justifica la amplitud de la discusión, por lo que sin importar el tiempo que se tarden, deberán fijarse los criterios a seguir.

Señaló que no se expresó como pretendió, por lo que el señor Ministro Cossío Díaz entendió que se refirió a la “majestad del Tribunal”, siendo que lo hacía a la “majestad de las sentencias”, tomando en cuenta que la palabra significa superioridad y autoridad sobre otros.

Precisó que se propone que ni el artículo 73 invocado ni algún otro numeral pueda servir de impedimento o guía para que este Alto Tribunal tome las decisiones relativas al cumplimiento de las sentencias de amparo.

Señaló comprender la inquietud del señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea en el sentido de que el referido precepto, a primera vista, pondría un límite en el actuar de la autoridad respecto de los recursos presupuestales; sin embargo, consideró que la invocación del Tesorero del Distrito Federal a ese numeral podría señalar la excusa a su incumplimiento.

Al respecto, consideró que este Alto Tribunal puede tomar las decisiones necesarias y dar las órdenes adecuadas para que a pesar del referido artículo 73 se cumpla con las sentencias de amparo, ordenando a las autoridades que sigan los pasos necesarios para las adecuaciones presupuestales y la suficiencia presupuestal ampliando el presupuesto global del Gobierno del Distrito Federal ante las autoridades legislativas correspondientes, sin limitar las órdenes que pueda disponer este Alto Tribunal escudándose en el citado numeral, sino que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación prevea que se realice con mayor celeridad, por lo que estimó indispensable hacer una interpretación del mismo para lograr el referido cumplimiento de las sentencias de amparo.

El señor Ministro Franco González Salas precisó que desde el principio planteó la necesidad de dar un sentido al citado artículo 73, recordando que para tal fin hizo referencia a lo previsto en el diverso 17 constitucional que señala que las leyes federales y locales deben garantizar la eficacia del

cumplimiento de las resoluciones, es decir, en el ordenamiento jurídico mexicano. Manifestó que las autoridades están argumentando que el artículo 73 impide el cumplimiento de las sentencias, recordando que en el considerando relativo al marco jurídico del Distrito Federal se identifican diversos puntos, indicando que en ningún momento se ha sostenido que este Alto Tribunal se deba sujetar al referido artículo 73, sino que por el contrario, se ha afirmado que no se puede interpretar literalmente, por lo cual, se han presentado algunas interpretaciones diversas, en el sentido de descalificarlo o de atribuirle un sentido para que haya un marco de referencia para la autoridad.

Consideró que la parte presupuestal involucrada, se encuentra sometida a diversos preceptos constitucionales; por lo cual, para que la autoridad pueda pagar, en primer lugar, se debe contar con los recursos necesarios, independientemente después de los mecanismos previstos para variar ese presupuesto que se fija por el órgano legislativo competente, que en el caso concreto es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Señaló que no está refiriéndose a responsabilidades, sino que está estableciendo las competencias y el margen que tienen éstas, cuando señaló que el primer párrafo del citado artículo 73 debe considerarse en el sentido de que la Asamblea del Distrito Federal no cuenta con una facultad potestativa o discrecional, sino que está obligada a

establecer en el presupuesto los recursos necesarios, atendiendo a los argumentos vertidos por este Tribunal Pleno.

Señaló que pueden haber circunstancias excepcionales que provoquen que una previsión presupuestal no sea suficiente, lo que no implica que cuando están determinadas las responsabilidades derivadas de una sentencia de amparo, el órgano legislativo no tenga obligación de fijar en el presupuesto los recursos necesarios para que se cumpla y si no hay recursos, dé razones suficientes para demostrar que es imposible fijar en el presupuesto esos recursos.

Indicó que en el caso concreto, se da una segunda etapa en la que no se determinaron los recursos suficientes para hacer frente al cumplimiento de las ejecutorias de amparo en las partidas correspondientes, situación en la que la propia ley local prevé que se debe acudir a la adecuación presupuestal, donde debería interpretarse un tercer paso consistente en que la autoridad responsable tiene la obligación de cumplir con las ejecutorias de amparo y de buscar las transferencias presupuestales necesarias para cumplir, lo que de no ser posible, deberá demostrarse ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que esté en posibilidad de considerar si realmente se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento, recordando lo señalado por el señor Ministro Aguirre Anguiano en el sentido de que si bien es cierto que se trata de un

presupuesto muy basto, también lo es que se trata de una ciudad muy grande con diversas necesidades que deban cubrirse con los recursos asignados. Precisó que de no ser posible lo anterior, se contaría con la posibilidad de solicitar una ampliación presupuestal.

Precisó que este Tribunal Pleno ha coincidido en el hecho de que no puede dejar de cumplirse una sentencia de amparo y las autoridades están obligadas a hacer lo que está a su alcance material y jurídicamente para este cumplimiento; por lo que de haber imposibilidad material o jurídica debía demostrarse, de manera que consideró que debía señalarse la obligación de determinar desde la aprobación del presupuesto las cantidades necesarias para hacer frente al cumplimiento de lo que se tiene previsto, pues si no se contara con suficiencia presupuestal las autoridades de cualquier manera deben cumplir con su obligación.

Manifestó que se ha hecho referencia a responsabilidades derivadas de juicios de amparo y del cumplimiento de las ejecutorias, situación por la que se declaró inconstitucional una ley que aplicó la autoridad administrativa; de manera que consideró que existe una responsabilidad compartida, por lo que propuso que sin abordar el tema de las responsabilidades, al entrar al marco de referencia, se pudiera determinar esta situación, de tal manera que la autoridad esté consciente de que debe dar

cumplimiento con las ejecutorias de amparo, con lo que coinciden los señores Ministros.

Además, precisó que no se puede argumentar que la Ley de Presupuesto del Distrito Federal prevé que debe acudirse a la ampliación presupuestal, sino que deben buscarse los recursos presupuestales con que se cuenta, hacer las transferencias necesarias y demostrar si es o no posible el cumplimiento. Asimismo, indicó que la autoridad está en libertad de hacer otro tipo de gestiones, como el caso de las ampliaciones presupuestales ante la Asamblea Legislativa para que, aunque se deje de cumplir con otras necesidades se pueda satisfacer la prioritaria consistente en cumplir con una sentencia de amparo ejecutoriada.

En ese orden de ideas, señaló que no se oponía a que se votara por el considerando respectivo en los términos que se encuentra, reservando su derecho para formular voto concurrente con las consideraciones que estima necesarias.

Recordó que existen ejecutorias del Tribunal Pleno en el sentido de que no es argumento válido decir que no se cuenta con presupuesto, tal como se ha señalado en la jurisprudencia, considerando que en el caso concreto, lo importante es definir la cadena de responsabilidades, respetando la obligación, como Tribunal Constitucional, de señalar que los órganos legislativos tienen obligación de establecer un presupuesto suficiente para fijar las cantidades

necesarias para pagar las sentencias ejecutorias que se deben cumplir, pues de no hacerse, será responsabilidad de la autoridad administrativa buscar de la gran bolsa de recursos del presupuesto, las transferencias necesarias para cubrirlas.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas consideró que el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea respondió la interrogante planteada por el señor Ministro Aguilar Morales, respecto de lo que este último agregó que - el tema concreto versa sobre no pretender colocar a las autoridades administrativas en una disyuntiva, y explicó las razones por las cuales no se estaba haciendo eso ni tampoco este Alto Tribunal estaba haciendo lo que correspondía hacer a las referidas autoridades.

Consideró que el oficio del Tesorero del Distrito Federal tiene una actitud de cumplimiento de la sentencia; sin embargo, señala que tiene una imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la totalidad de las sentencias, razón por la que se está brindando un marco jurídico de referencia para llevar a cabo el cumplimiento de las sentencias de amparo.

La señora Ministra Luna Ramos señaló comprender las razones por las que se busca una interpretación del referido artículo 73. Consideró que desde el punto de vista de los señores Ministros que desde un principio se manifestaron

porque ésta no era necesaria ya que si bien es cierto que la autoridad administrativa está ceñida a un marco jurídico para llevar a cabo determinadas funciones, lo cierto es que ese marco jurídico le permite llevar a cabo las acciones descritas en el proyecto, como son las adecuaciones presupuestales previstas en la ley, estimando que era suficiente que este Alto Tribunal avalara esa posibilidad precisando que no es obstáculo lo previsto en el referido numeral porque se trata del cumplimiento de las sentencias de amparo.

Asimismo, comprendió que la postura mayoritaria se centra en la necesidad de la interpretación del citado precepto en función de que ha sido el argumento toral en el que el Tesorero del Gobierno del Distrito Federal adujo su imposibilidad de cumplimiento y su posibilidad de excusarlo al no contar con una partida mayor para cumplir con las sentencias.

En ese orden, consideró que se ha discutido por este Tribunal Pleno que para responder el argumento del Tesorero se debía señalar que aunque el referido artículo 73 prevé que no se cuenta con otros recursos para el citado cumplimiento, se pueden llevar a cabo las adecuaciones presupuestales necesarias antes de acudir a la Asamblea de Representantes a solicitar una ampliación presupuestal.

Por ende, si la contestación del argumento del Tesorero es para el efecto de su excusabilidad y para

determinar si es o no fundamento suficiente para sostener si debe o no realizar una acción distinta a la de solicitar la ampliación a la Asamblea de Representantes, señaló que se uniría a determinar que se lleve a cabo la referida interpretación del artículo 73, como el marco jurídico que el citado funcionario está dando para hacer valer su inexcusabilidad; manifestando que no estaría de acuerdo en que dicha interpretación se haga en la forma en que se está determinando en el proyecto, o cuando menos, no en la forma encasillada para determinar esta situación previa a las adecuaciones presupuestales, estimando que en este punto podría encontrarse el punto de unión entre los que sostenían que no era necesaria la interpretación.

Consideró fundamental la interpretación del señor Ministro Franco González Salas relativa al primer párrafo del artículo 73, en el sentido que si bien es cierto que conforme al referido precepto no se puede dar cumplimiento a la sentencia de amparo al no contar con los recursos presupuestales y al haberse agotado la partida correspondiente, también lo es que establecer la obligación de la Asamblea de Representantes no los condicionaba, lo que estimó importante pues se estaría en el supuesto de que debía supeditarse a que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal determine si otorgará o no la partida correspondiente.

En ese orden de ideas, propuso que si se hiciera una interpretación del citado precepto, fuera de manera integral, desde su primer párrafo estableciendo que para cada ejercicio fiscal la Asamblea “deberá”, aprobar en el Decreto una partida presupuestal específica que será destinada a cumplimentar las resoluciones definitivas pronunciadas por los órganos jurisdiccionales competentes, por lo que consideró que la interpretación del primer párrafo debía ser en ese sentido.

Además, estimó que el problema debiera ser todavía más amplio, pues no se puede sujetar de manera exclusiva a que se lleven a cabo adecuaciones presupuestales ni las acciones que sean necesarias, para lograr el cumplimiento dentro de las posibilidades que el marco legal en el cual se encuentran se las otorgue, porque se estaría encasillando a una acción específica, recordando que la ley puede cambiar o puede haber otras posibilidades en la propia legislación; por lo que propuso que no se encasillara exclusivamente a las adecuaciones, sino que se citaran únicamente como ejemplo, para estar en posibilidad de interpretar el citado numeral: el primer párrafo, en el afán del deber de la Asamblea; y, el segundo párrafo, en el afán de que si bien es cierto que cuando se calcula que están por terminarse los recursos se puede solicitar la ampliación presupuestal a la Asamblea de Representantes, sin perjuicio de esa solicitud, se pueda realizar cualquier situación que dentro del marco normativo correspondiente pueda llevarse a cabo para lograr

el cumplimiento de las sentencias de amparo dándole prioridad a ese cumplimiento, por lo que debía hacerse de lado el obstáculo a que se refiere el artículo 47 del citado ordenamiento que señala que sólo lo que está presupuestado se puede pagar; por lo que en el sentido que expresó, se manifestaría por la referida interpretación.

El señor Ministro Pardo Rebolledo consideró que la discusión ha avanzado en un sentido diverso al que planteó cuando estimó innecesaria la interpretación conforme del referido artículo 73. Además, consideró importante aclarar que los señores Ministros que opinaron que no era necesaria esa interpretación conforme, no están solapando ningún incumplimiento o dilación en la ejecución de las sentencias de amparo.

Señaló que su planteamiento era en el sentido de que se trataba de un aspecto meramente formal, porque el argumento de la interpretación conforme del artículo 73, a su parecer, no fortalece la argumentación que sostiene la conclusión a la que se llega en el proyecto en el que se discute que determinadas autoridades del Gobierno del Distrito Federal deben hacer transferencias entre sus partidas presupuestales no etiquetadas para cumplir con las sentencias de amparo.

Consideró que los argumentos adicionales que se puedan obtener de una interpretación conforme, no abonan

la argumentación que sostiene la conclusión de la propuesta; sin embargo, no tendría inconveniente en votar a favor de ésta en el supuesto de que si en dichos asuntos se argumentara que la autoridad administrativa del Distrito Federal ajustara sus partidas y de no ser suficientes, solicitara a la Asamblea Legislativa la ampliación correspondiente, momento en el que ésta se encontrará obligada a darle dicha ampliación, precisando que no es el caso, pues en el presente asunto no se aborda ese supuesto.

Manifestó que su planteamiento inicial era estrictamente formal, respecto a que no es necesaria la interpretación conforme del artículo 73 para llegar a la conclusión de que las autoridades deban hacer las transferencias presupuestales entre sus partidas autorizadas que no estén etiquetadas para dar cumplimiento a la sentencia de amparo.

Señaló que se podría hacer esa interpretación conforme del artículo 73, sin que ésta se relacione con la conclusión a la que llega el proyecto ni tampoco trata de prever futuras complicaciones en el cumplimiento de estas sentencias, pues éstas se tendrán al momento en que las autoridades argumenten que las transferencias presupuestales que llevaron a cabo no son suficientes para cumplir con las sentencias, situación en la que se tendría que abrir una segunda etapa en la que se deberán aplicar

las medidas pertinentes para lograr el cumplimiento de las sentencias.

El señor Ministro Presidente Silva Meza se manifestó a favor de la propuesta del proyecto así como de la importancia y trascendencia del mismo por la acumulación de incidentes de inejecución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se debe procurar una cultura de cumplimiento, de respeto, de respetabilidad a los tribunales constitucionales de amparo y a las sentencias emitidas por éstos.

Agregó que en el caso concreto, se está en presencia de asuntos relacionados con la devolución de recursos, respecto de temas determinados inconstitucionales en función de cuestiones tributarias, fundamentalmente, indicando que en todos los casos se trata de un incumplimiento a una ejecutoria de amparo, lo cual no es cosa menor, por lo que este Alto Tribunal no debe permitir su incumplimiento.

Indicó que este proyecto regiría a todos aquellos similares, para determinar los cauces o cadenas de responsabilidad en los incumplimientos y a partir de que las autoridades del Distrito Federal han invocado el artículo 73 de la ley correspondiente, por lo que al darles contestación se realiza una interpretación conforme del precepto, a efecto de tener una cadena más de solución en este tipo de

asuntos, pues cuando estas transferencias o adecuaciones al presupuesto recibido no fuesen suficientes deberán acudir a la Asamblea Legislativa, como último recurso, porque esta ejecutoria de amparo debe tener cumplimiento.

Agregó que el siguiente paso consiste en determinar qué autoridades sí pueden hacer adecuaciones, y si no se tiene disponibilidad, entonces debería acudir a la Asamblea de Representantes y, en el caso extremo, debían endeudarse.

Estimó la discusión muy rica y productiva para emitir las tesis correspondientes, para determinar los caminos jurisprudenciales respecto de la conducción de las autoridades en la ejecución y cumplimiento de este tipo de ejecutorias.

Asimismo, consideró que se presenta una disyuntiva o dos alternativas para resolver en el proyecto, la propuesta justificada, interpretando el citado artículo 73, o el camino constitucional, en donde no es necesario interpretar ningún artículo de leyes secundarias, pero también es posible considerar a mayor abundamiento y podría decirse: “Aunque no existiera el artículo 73 se debería de cumplir.” Señaló que se aborda el artículo 73 porque está inmerso en el procedimiento de cumplimiento y se interpreta para lograr una solución conciliatoria para las dos posiciones, aceptar el mayor abundamiento, aceptar el enriquecimiento del

argumento a partir de que se haga una referencia al multicitado artículo 73. De esta suerte, estimó que el considerando cuarto resulta la base para los otros demás.

Sometida a votación la tercera parte del considerando cuarto en el sentido de incorporar al fallo una interpretación del artículo 73 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, sin que ello obste para considerar que constitucionalmente las autoridades tienen la obligación de cumplir con las sentencias de amparo, se aprobó por unanimidad de votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, con salvedades, Aguilar Morales, con salvedades; Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Pardo Rebolledo y Aguilar Morales manifestaron salvedades en cuanto a la necesidad de incorporar al fallo la interpretación conforme del referido precepto, estimando que únicamente debía agregarse a mayor abundamiento. Los señores Ministros Franco González Salas y Aguilar Morales reservaron su derecho para emitir votos concurrentes.

El señor Ministro Silva Meza sometió a consideración del Tribunal Pleno el cuarto tema del considerando cuarto consistente en la excusabilidad del incumplimiento del fallo protector, pues en el proyecto se sostiene que el incumplimiento en el que han incurrido el Administrador

Tributario respectivo, el Director General de Servicios al Contribuyente, el Subtesorero, el Tesorero y el Secretario de Finanzas, todos del Gobierno del Distrito Federal, es excusable, el cual se aprobó, en votación económica, por unanimidad de votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a consideración del Tribunal Pleno el considerando quinto del proyecto en el que se precisan las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo y las conductas o acciones que cada funcionario debe desarrollar, solicitando al secretario general de acuerdos que diera lectura.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente el secretario general de acuerdos dio lectura de los funcionarios vinculados:

1. Al Director General de Política Presupuestal de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, para que dentro de los tres días siguientes a la notificación de esta sentencia realice las adecuaciones presupuestales necesarias para cumplir el fallo protector.

2. Al Administrador Tributario correspondiente y al Director General de Servicios al Contribuyente, ambos de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, para que una vez autorizadas las referidas adecuaciones presupuestales, dentro de los tres días siguientes realicen los trámites subsecuentes para pagar el adeudo respectivo al quejoso; y.

3. A los dos superiores jerárquicos de dichas autoridades, en primer lugar al Subsecretario de Egresos y al Secretario de Finanzas, ambos del Gobierno del Distrito Federal; y en segundo lugar, al Subtesorero y al Tesorero del Gobierno del Distrito Federal, para que realicen todos los actos necesarios para el debido cumplimiento de las sentencias, autoridades todas ellas apercibidas con la aplicación de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas estimó que resulta muy corto el tiempo de tres días, por lo que solicitó se ampliara el plazo a diez días hábiles.

El señor Ministro Presidente Silva Meza puso a consideración del Pleno el término para dar cumplimiento, indicando que había precedentes en los que se determinó el término de diez días para efectos de información en relación a los cumplimientos.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia indicó que se trata de tres términos distintos, uno es para hacer las adecuaciones

presupuestales necesarias, y sugirió diez días hábiles como prudente; luego, para que el Director General de Servicios al Contribuyente y al Administrador Tributario cumplan, pues una vez hechas las adecuaciones presupuestales dentro de los tres días siguientes, resulta prudente el termino de tres días para aplicar el pago, y por último, los dos superiores jerárquicos, pues a ellos no se les señala plazo, sino que se les conmina a la realización de todas las acciones necesarias para el debido cumplimiento de la sentencia.

El señor Ministro Aguilar Morales se manifestó de acuerdo con la propuesta del señor Ministro Ortiz Mayagoitia por ser razonable, pero estimó que pudiera considerarse como no necesario dentro del proyecto que en la página sesenta y dos se establece una condición a futuro, que no es seguro si se va a dar o no, lo que sería motivo de una explicación que la autoridad realice con motivo de estos requerimientos en la que se señala: “De especial relevancia resulta precisar que sólo la circunstancia de que por disposición legal no pueda disponerse de los recursos de alguna de las partidas del presupuesto, bien sea porque los recursos respectivos constituyan gasto etiquetado o comprometido o lógicamente se encuentran en una etapa presupuestal posterior, se podrá justificar la imposibilidad de que la Dirección de Política realice las adecuaciones necesarias para cumplir el fallo protector al tratarse de recursos que jurídicamente sirven de sustento a las obligaciones contraídas por el gobierno, ya que atendiendo a

la majestad de las sentencias de amparo su cumplimiento generalmente prevalece sobre el de los gastos presupuestados respecto de los que no se hayan llevado a cabo de las actividades necesarias para que adquieran el gasto”, de lo que se desprende una salida a la autoridad para que pueda aducir que se le informó pero que materialmente no es posible.

Por ende, una vez que se le ordena que cumpla e informe con motivo de este requerimiento será posible evaluar si es o no justificada determinada circunstancia, sin adelantar una justificación de algo que todavía no ha sucedido.

El señor Ministro Cossío Díaz señaló que si el señor Ministro Ortiz Mayagoitia aceptara la adecuación de los términos que hace el señor Ministro Aguilar Morales estaría de acuerdo con el proyecto.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas indicó que se debía estandarizar el término para que fueran los diez días hábiles.

El señor Ministro Valls Hernández sugirió que se precisara que estos términos son para que se cumpla con la sentencia de amparo, no para conseguir los recursos.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia acepto ceñirse al criterio del Pleno al haber muchos incidentes listados ya que este asunto servirá como base para fallar los demás. Agregó que estaría de acuerdo con lo que el Pleno determine. Diez días para la adecuación presupuestal y diez días para la emisión de la cuenta líquida certificada y expedición del cheque a favor del quejoso.

Sometida a votación la propuesta modificada del considerando quinto del proyecto, se aprobó, en votación económica, por unanimidad de votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza.

Sometida a votación la propuesta consistente en que el término sería de diez días hábiles para la adecuación presupuestal y diez días hábiles para la emisión de la cuenta líquida y certificada y la expedición del cheque a favor del quejoso, se aprobó, por unanimidad de votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza.

El señor Ministro Aguilar Morales propuso que se modificara la expresión de “incumplimiento” por la de “excusa en el cumplimiento” y precisó que las acciones que tome la autoridad deberá probarlas ante este Alto Tribunal para justificar su actuación.

Por ende, los puntos resolutivos se aprobaron por unanimidad de votos en los siguientes términos:

“PRIMERO. *Requírase al Director General de Política Presupuestal en su carácter de autoridad directamente vinculada al cumplimiento del respectivo fallo protector, así como al Subsecretario de Egresos y al Secretario de Finanzas, todos del Gobierno del Distrito Federal, en su carácter de superiores jerárquicos de aquél, para los efectos señalados en el último considerando de esta ejecutoria.*

SEGUNDO. *Requírase al Director General de Servicios al Contribuyente y al Administrador Tributario en Parque Lira, en su carácter de autoridades directamente vinculadas al cumplimiento del respectivo fallo protector, así como al Subtesorero y al Tesorero, todos del Gobierno del Distrito Federal en su carácter de superiores jerárquicos de aquéllos, para los efectos señalados en el último considerando de esta ejecutoria.*

TERCERO. *Queda sin efectos el dictamen de veinte de mayo de dos mil nueve del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el incidente de inejecución de sentencia 37/2009 de su índice.*

Sesión Pública Núm. 25

Martes 1° de marzo de 2011

CUARTO. *Para los efectos precisados en el considerando último de esta resolución, déjese abierto el presente incidente de inejecución de sentencia”.*

El señor Ministro Presidente Silva Meza solicitó al secretario general de acuerdos que hiciera los ajustes correspondientes a los trescientos diecisiete asuntos con los que se dará cuenta en la siguiente sesión para que se aborden en bloque y que a partir de esos criterios, se elaboren las tesis correspondientes.

El señor Ministro Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados, convocó a los señores Ministros para la sesión pública solemne en la que rendirá el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos su informe anual de labores, que tendrá verificativo el jueves tres de marzo del año en curso a las diez horas con treinta minutos y concluyó la sesión a las catorce horas con diez minutos.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.